



RESOLUCION N. 01234

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO SANCIONATORIO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades conferidas por la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, la Ley 1333 de 21 de julio 2009, las delegadas por la Resolución 01466 de 2018, modificada por la Resolución 02566 de 15 de Agosto de 2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006 y el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado parcialmente por el Decreto Distrital 175 del 4 de mayo de 2009, el Decreto 1608 de 1978, Resolución 438 de 2001 derogada por la Resolución 1909 del 2017 en sus artículos artículo 2 y 4 parágrafo 7, modificada por la Resolución 0081 del 2018, Decreto 3678 de 2010, Resolución 2064 21 De octubre De 2010, Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo.

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que mediante **Acta de Incautación 193 del 27 de julio de 2011**, la Policía Ambiental y Ecológica adscrita a la Policía Metropolitana de Bogotá, incautó dos (2) especímenes de Fauna Silvestre denominados **TORTUGA MORROCOY (*Geochelone carbonaria*)**, al señor **SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.951.668, domiciliado en la Carrera 91 No. 40 A-27 de Bogotá.

Mediante radicado No 2013EE026805 del 29 de enero de 2012, se envía citatorio al señor SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ, para que comparezca a notificarse personalmente del Auto No. 02775 del 28 diciembre de 2012, teniendo en cuenta que la persona no compareció en el término estipulado se procedió a notificar por aviso el día 8 de Julio de 2013.

Verificado el Boletín legal de la Secretaria Distrital de ambiente, el Auto No. 02775 del 28 diciembre de 2012, se encuentra debidamente publicado de conformidad con el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. Dando cumplimiento al artículo 56 de la Ley 1333 de 2009 se comunicó el contenido del Auto de inicio de proceso sancionatorio a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.



Que mediante **Auto No 02945 del 05 de noviembre de 2013**, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA, formuló pliego de cargos contra el señor SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.070.951.668, por no presentar el salvoconducto de movilización, en los siguientes términos:

“CARGO ÚNICO: *Por movilizar en el territorio nacional Dos (2) especímenes de Fauna Silvestre denominados TORTUGA MORROCOY (Geochelone Carbonaria), sin el salvoconducto que ampara su movilización vulnerando presuntamente con esta conducta el artículo 196 (Modificado por el art. 27, Decreto Nacional 309 de 2000) del Decreto 1608 de 1978 y el artículo 3 de la Resolución 438 del 2001.”*

Que el anterior acto administrativo, se notificó por edicto el cual se fijó el día 23 de mayo de 2016, desfijado el 27 de mayo de 2016, según consta a folio 21 del expediente, y con constancia de ejecutoria del 08 de junio de 2016 según consta en el folio 19 del expediente.

Mediante **Auto No. 02312 del 10 de mayo de 2018**, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA, **Decreta Practica De Pruebas** al señor **SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.951.668.

El señor **SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ**, no presentó descargos contra el Auto No 05977 del 09 de diciembre de 2015, siendo esta la oportunidad procesal con que contaba el investigado para aportar y/o solicitar la práctica de pruebas que estimara conducentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, en consecuencia, esta autoridad ambiental determina que no existen pruebas por decretar a solicitud de parte.

Que el anterior acto administrativo fue publicado en la cartelera de la Secretaria Distrital de Ambiente quedando notificado por edicto el día 28 de septiembre de 2018.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro Estado social de derecho.



De la misma forma, existen en nuestro ordenamiento unas normas reguladoras ambientales que conducen a la aplicación de medidas preventivas y sancionatorias, por el incumplimiento a las regulaciones establecidas sobre la protección del ambiente y el manejo de los recursos naturales renovables en nuestro país.

Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que la Constitución Nacional contiene derechos y deberes de los ciudadanos frente a la sostenibilidad de un ambiente sano, en el artículo 79 encontramos que "*Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano*" y en el artículo 80 ordena al Estado que "*...deberá prevenir y controlar factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir reparación de los daños causados*". Es por esto que las autoridades ambientales están en la obligación de garantizar el derecho a un ambiente sano a los ciudadanos, y hacer cumplir las disposiciones con el fin de que esto no sea vulnerado.

Que, a su vez, el artículo 80 de la Constitución Política, preceptúa que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, en el inciso 2 del mencionado artículo, se refiere a los instrumentos represivos y establece la obligación por parte del estado para "*imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados*". Es por esto que las autoridades ambientales están en la obligación de garantizar el derecho a un ambiente sano a los ciudadanos y hacer cumplir las disposiciones con el fin de que este no sea vulnerado.

Que igualmente, el Ordenamiento Constitucional señala en su artículo 95, que toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las Leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano, establece en su numeral octavo el de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

Consecuentes con la política pública de protección del ambiente y el contenido y alcance de las regulaciones existentes en materia de protección ambiental y manejo de los recursos naturales en nuestro país, es imprescindible actuar dentro del marco de las finalidades de la función administrativa de la autoridad ambiental, a efectos de propender por el cumplimiento de los deberes sociales del Estado, para velar porque se asegure el establecimiento y la operación de



controles adecuados y eficaces respecto a los factores de deterioro ambiental, teniendo de presente que el desarrollo económico no se convierta en una amenaza a la preservación de los recursos naturales renovables.

Que el artículo 196 (Modificado por el art. 27, Decreto Nacional 309 de 2000) decreto 1608 de 1978, Resolución 438 de 2001 derogada por la Resolución 1909 del 2017 en sus artículos artículo 2 y 4 parágrafo 7, modificada por la Resolución 0081 del 2018, establece: *“Toda persona que deba transportar individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre debe proveerse del respectivo salvoconducto de movilización. El salvoconducto amparará únicamente los individuos, especímenes y productos indicados en él, será válido por una sola vez y por el tiempo indicado en el mismo. El salvoconducto se otorgará a las personas naturales o jurídicas titulares de permisos de caza o de licencias de funcionamiento de establecimientos de caza, museos, colecciones, zoológicos y circos”*.

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo 3, que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.

Que, a su vez, el artículo 5 de la misma ley, establece que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.

Resolución 2064 de 21 de octubre de 2010 **“Artículo 2.- Definiciones. Para efectos de la aplicación de la presente resolución se adoptan las siguientes definiciones: (...) Restitución de especímenes de especies de flora y fauna silvestres. Es la acción de devolver al Estado, los especímenes aprehendidos incluyendo el valor de todos los costos incurridos desde el momento de la aprehensión hasta su disposición final.”**



Que, respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, según el cual la actividad económica y la iniciativa privada son libres, pero "...dentro de los límites del bien común...".

Que adicionalmente la Corte Constitucional en Sentencia, T-536 del 23 de septiembre de 1992, determinó:

"...Para esta Corte, entonces, no cabe duda de que el ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho constitucional fundamental, pues su violación atenta directamente contra la perpetuación de la especie humana y, en consecuencia, con el derecho más fundamental del hombre: la vida. El derecho a la salud y a la vida son derechos fundamentales porque son esenciales al hombre, la salud se encuentra ligada al medio ambiente que le rodea y que dependiendo de las condiciones que éste le ofrezca, le permitirá desarrollarse económica y socialmente a los pueblos, garantizándoles su supervivencia..."

Se considera pertinente en este momento hacer referencia a algunos criterios adicionales de la Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia T-411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:

"La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.

"Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (arts. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros)."

Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero señala:



“El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros, han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas que establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo.”

Que adicionalmente la Corte Constitucional en Sentencia, Sentencia T-146/16, determino:

“Finalmente, si bien en este caso es claro que el bienestar del primate está satisfecho, por cuanto después de un largo proceso volvió a adquirir sus comportamientos y dieta natural para retornar a la selva, lo cierto es que las autoridades ambientales también deberán valorar cuidadosamente la afectación del animal, como ser sintiente, para adoptar cualquier decisión sobre su destino final, pues esta Corporación no desconoce que en ocasiones extremas el apego del animal con la familia puede llegar a ser de tal grado, que separarlo de ella podría causarle un grave sufrimiento e incluso su muerte, al dejar de realizar sus actividades vitales, bajo el entendido que la especie no responda de manera efectiva al proceso de rehabilitación. En casos como estos, el numeral 2 del artículo 52 de la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las sanciones que corresponda, establece una alternativa de disposición final en sus tenedores. Al respecto, la norma en cita dispone que:

“Tenedores de fauna silvestre. En casos muy excepcionales y sin perjuicio de las sanciones pertinentes. Cuando la autoridad ambiental considere que el decomiso de especímenes vivos de fauna silvestre implica una mayor afectación para estos individuos, soportado en un concepto técnico, podrán permitir que sus actuales tenedores los conserven y mantengan, siempre y cuando se registren previamente ante la autoridad ambiental y cumplan con las obligaciones y responsabilidades que esta determine en materia de manejo de las especies a conservar.”

III. CARGO FORMULADO

Que a través del artículo 1 del **Auto No. 02945 del 05 de noviembre de 2013**, esta Secretaría formuló cargo único en contra del señor **SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.951.668, por la infracción del artículo 196 del



Decreto 1608 de 1978 y la Resolución 438 de 2001 derogada por la Resolución 1909 del 2017 en sus artículos artículo 2 y 4 parágrafo 7, modificada por la Resolución 0081 del 2018.

Que la anterior disposición normativa al tenor literal establece:

DECRETO 1608 DE 1978

ARTICULO 196. Artículo hoy compilado en el artículo 2.2.1.2.22.1 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. Toda persona que deba transportar individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre debe proveerse del respectivo salvoconducto de movilización. El salvoconducto amparará únicamente los individuos, especímenes y productos indicados en él, será válido por una sola vez y por el tiempo indicado en el mismo.

El salvoconducto se otorgará a las personas naturales o jurídicas titulares de permisos de caza o de licencias de funcionamiento de establecimientos de caza, museos, colecciones, zoológicos y circos.

Aunado a lo anterior, la **Resolución 438 de 2001** derogada por la **Resolución 1909 del 2017** en sus artículos artículo 2 y 4 parágrafo 7, modificada por la **Resolución 0081 del 2018**, por medio de la cual se establece la definición de Salvoconducto Único Nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica y el ámbito de aplicación.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente resolución será aplicada por las autoridades ambientales competentes y todo aquel que esté interesado en transportar por el territorio nacional, especímenes de la diversidad biológica en primer grado de transformación e individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre, cuya obtención esté amparada por acto administrativo otorgado por la autoridad ambiental competente.

Artículo 4. Definiciones. Para la correcta interpretación de la presente resolución, se adoptan las siguientes definiciones.

Salvoconducto Único Nacional en la Línea para la movilización de especímenes de la diversidad biológica (SUNL): documento que ampara la movilización, removilización y renovación en el territorio nacional de especímenes de la diversidad biológica, emitido por la autoridad ambiental competente, a través de la ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL).



IV. RAZONES DE LA DEFENSA O DESCARGOS

El señor **SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.951.668, no presento descargos contra el **Auto No. 02945 del 05 de noviembre de 2013**.

Que, de conformidad con lo establecido en el **Auto No. 02312 del 10 de mayo de 2018**, fueron incorporados en la presente diligencia administrativa los siguientes:

Documentales:

- **Acta de Incautación 193 del 27 de julio de 2011**, realizado al señor **SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.951.668.

Decrétese de oficio la siguiente prueba:

- Elaborar por parte del Área Técnica de la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre de esta Entidad, Concepto Técnico, donde se verifique la existencia del espécimen incautado, estado actual y su ubicación.

V. ANALISIS PROBATORIO Y DECISION

Con el objeto de abordar la discusión Jurídica en el sub examine de cara a los hechos, los cargos formulados a través del **Auto No. 02945 del 05 de noviembre de 2013**, las pruebas obrantes en el informativo, así como la normativa y Jurisprudencia que respalda el tratamiento Jurídico de la Administración de los Recursos Naturales conviene analizar el alcance de las disposiciones Normativas cuya Infracción se le atribuye al señor **SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.951.668, por lo que conviene ahondar en el juicio de responsabilidad en materia sancionatoria ambiental, en torno a la imputación efectuada por transgresión de las normas sobre protección ambiental, en materia de emisión de fauna específicamente lo establecido en artículo 196 (Modificado por el art. 27, Decreto Nacional 309 de 2000) decreto 1608 de 1978, Resolución 438 de 2001 derogada por la Resolución 1909 del 2017 en sus artículos artículo 2 y 4 párrafo 7, modificada por la Resolución 0081 del 2018.

Con base en lo anterior, se procederá a analizar la situación fáctica del señor **SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ**, frente a los cargos imputados de la siguiente manera:

8



El cargo que se le imputa al señor **SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.951.668, está dado por la infracción al artículo 196 del Decreto 1608 de 1978 en concordancia con el artículo 3 de la Resolución 438 de 2001 derogada por la Resolución 1909 del 2017 en sus artículos artículo 2 y 4 párrafo 7, modificada por la Resolución 0081 del 2018, como consecuencia de la movilización de dos (2) especímenes de Fauna Silvestre denominados TORTUGA MORROCOY (*Geochelone Carbonaria*), sin contar con el salvoconducto único nacional exigido para movilizar especímenes de fauna silvestre.

Como prueba de los hechos objeto de investigación dentro del presente tramite sancionatorio se tiene en primer lugar el **Acta de Incautación 193 del 27 de julio de 2011**, mediante la cual la Policía Ambiental y Ecológica incauto dos (2) especímenes de Fauna Silvestre denominados TORTUGA MORROCOY (*Geochelone Carbonaria*), al señor **SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.951.668, los cuales eran transportados sin ningún tipo de autorización otorgada por parte de la autoridad ambiental competente y en condiciones indebidas, por lo cual el único cargo formulado en el **Auto No. 02945 del 05 de noviembre de 2013**, está llamado a prosperar.

De acuerdo al material probatorio obrante dentro del expediente y lo evidenciado en **Acta de Incautación No. 193 del 27 de julio de 2011**, la Policía Ambiental y Ecológica adscrita a la Policía Metropolitana de Bogotá, incautó dos (2) especímenes de Fauna Silvestre denominados **TORTUGA MORROCOY (*Geochelone carbonaria*)**, al señor **SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.951.668, por no portar el respectivo salvoconducto que respalde la movilización de los especímenes, según la norma establecida en el artículo 196 (Modificado por el art. 27, Decreto Nacional 309 de 2000) Decreto 1608 de 1978, Resolución 438 de 2001 derogada por la Resolución 1909 del 2017 en sus artículos artículo 2 y 4 párrafo 7, modificada por la Resolución 0081 del 2018.

En virtud de lo anterior, y con base en el **Acta de Incautación No. 193 del 27 de julio de 2011**, que antecede, se arriba a la conclusión de que es procedente la **RESTITUCIÓN DE ESPECIMENES DE ESPECIES DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE**, conforme a lo previsto en artículo 9 del Decreto 3678 de 2010 (Compilado en el artículo 2.2.10.1.2.6 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015) y el Artículo 48 de la Ley 1333 de 2009.

Que descendiendo al caso sub examine, con fundamento en la precitada norma, es claro que el responsable del incumplimiento de las normas ambientales en materia de fauna es el señor **SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.951.668, por haber incurrido en la infracción de las siguientes normas: artículo 196



(Modificado por el art. 27, Decreto Nacional 309 de 2000) decreto 1608 de 1978, Resolución 438 de 2001 derogada por la Resolución 1909 del 2017 en sus artículos artículo 2 y 4 parágrafo 7, modificada por la Resolución 0081 del 2018.

Que así las cosas, en el expediente obran suficientes pruebas documentales y técnicas que dan cuenta de la responsabilidad al señor **SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.951.668, por el incumplimiento de la normativa ambiental, específicamente en el artículo 196 (Modificado por el art. 27, Decreto Nacional 309 de 2000) decreto 1608 de 1978, Resolución 438 de 2001 derogada por la Resolución 1909 del 2017 en sus artículos artículo 2 y 4 parágrafo 7, modificada por la Resolución 0081 del 2018, conforme al cargo único, atribuido mediante el **Auto No. 02945 del 05 de noviembre de 2013**, puesto que se concluyó que la movilización de fauna silvestre por el territorio nacional **INCUMPLE** al no portar el salvoconducto de movilización de especímenes.

Que teniendo en cuenta el análisis anterior considera esta Autoridad Ambiental que, en el presente caso, el cargo único atribuido al infractor mediante el **Auto No. 02945 del 05 de noviembre de 2013, prosperó,** teniendo en cuenta que el señor **SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.951.668, movilizó en el territorio colombiano el espécimen incautado sin proveerse del salvoconducto único de movilización que autoriza su movilización vulnerando con ello normatividad ambiental.

Que en este orden de ideas, para esta Autoridad queda claro que el señor **SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.951.668, a quien según **Acta de Incautación No. 193 del 27 de julio de 2011**, la Policía Ambiental y Ecológica adscrita a la Policía Metropolitana de Bogotá, se incautó de dos (2) especímenes de Fauna Silvestre denominados **TORTUGA MORROCOY (*Geochelone carbonaria*)**, infringió la normatividad ambiental vigente, en materia de fauna de acuerdo con el incumplimiento del artículo 196 (Modificado por el art. 27, Decreto Nacional 309 de 2000) decreto 1608 de 1978, Resolución 438 de 2001 derogada por la Resolución 1909 del 2017 en sus artículos artículo 2 y 4 parágrafo 7, modificada por la Resolución 0081 del 2018.

Que, en conclusión, es obligación de esta Secretaría Distrital de Ambiente por mandato superior, en ejercicio de la gestión asignada, mediante el cumplimiento de las funciones fijadas legalmente y en el ámbito de su competencia hacer efectivos los mandatos constitucionales y legales dentro del marco del estado de derecho y el desarrollo sostenible.



Que en consideración a los preceptos Constitucionales y Legales esta Secretaría ha dado cabal cumplimiento al debido proceso dentro del proceso sancionatorio iniciado y las decisiones tomadas tienen su fundamento legal, habiéndose cumplido los procedimientos legales instaurados en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1333 de 2009 y en las demás normas aplicables al caso, preservando las garantías que protegen al señor **SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.951.668, quien no desvirtuó los cargos formulados, por lo cual la autoridad ambiental, está en la obligación de imponer la sanción respectiva.

Que del análisis técnico y del material probatorio obrante en el expediente **SDA-08-2011-2893**, se considera que al señor **SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.951.668, según **Acta de Incautación No. 193 del 27 de julio de 2011**, infringió la normatividad ambiental vigente, en materia de fauna de acuerdo con el incumplimiento del artículo 196 (Modificado por el art. 27, Decreto Nacional 309 de 2000) Decreto 1608 de 1978, Resolución 438 de 2001 derogada por la Resolución 1909 del 2017 en sus artículos artículo 2 y 4 parágrafo 7, modificada por la Resolución 0081 del 2018, conforme a los Cargos Formulados mediante **Auto No 02945 del 05 de noviembre de 2013**, razón por la cual esta Secretaría procederá a Declarar Responsable Ambientalmente al señor **SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.951.668, del Cargo único Formulado y procederá a imponer una sanción, como a continuación se describe:

VI. DE LA SANCIÓN A IMPONER

Que el **Artículo 40 de la Ley 1333**, reguló el tema de las sanciones a imponer dentro del proceso sancionatorio ambiental, el cual cita:

“ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.

11



4. Demolición de obra a costa del infractor.

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.

6. **Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.**

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.” (...) (negrilla fuera de texto original).

Que así mismo, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, expidió la Resolución No. 2086 de 2010, por el cual se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1º del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

INFORME TÉCNICO DE CRITERIOS No. 00481, 15 de abril del 2019

Que, de conformidad con el Informe Técnico, se estableció:

3.1.2. GRADO DE AFECTACIÓN AMBIENTAL

Este criterio hace alusión a la medición del impacto a partir del grado de incidencia de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la valoración de la intensidad, la extensión, la persistencia, la recuperabilidad y la reversibilidad de la afectación ambiental, las cuales determinarán la importancia de la misma.

Según el libro rojo de los reptiles en Colombia, esta especie se encuentra categorizada previamente como En Peligro Crítico, especialmente por su situación en la región Caribe.

Se categoriza en la actualidad como Vulnerable, ya que si bien sigue existiendo probablemente una disminución en el tamaño de su población, área de ocupación y extensión de presencia, la especie tiene una amplia distribución que incluye zonas mejor conservadas que la región Caribe.

La siguiente es la identificación de posibles afectaciones:

Sistema	Subsistema	Componentes
Medio físico	Medio biótico	Fauna

Conforme a lo anterior, individualizando el hecho que genera la infracción, se analiza bajo el riesgo de afectación a componente fauna:



BIEN DE PROTECCIÓN AFECTADO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE AFECTACIÓN
Fauna	<p><i>La tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonarius) la cual prefiere las áreas abiertas no selváticas, se la encuentra con frecuencia cerca de los caños y esteros de los bosques de galería, en la periferia de sabanas y praderas de pastos y en los bosques secos. Las poblaciones transandinas (al occidente de los Andes) pueden penetrar en áreas boscosas y se adaptan fácilmente a regiones deforestadas (Rueda et al, 2007).</i></p> <p><i>En cuanto a su historia natural es una tortuga solitaria, de actividad diurna; consume hongos, hojas tiernas, frutos, flores y semillas de una gran variedad de plantas, le atraen en especial las flores y frutos de colores rojos o amarillos en tanto que desperdicia los frutos verdes, los cítricos, las raíces y plantas acuáticas. Complementa su dieta con pequeños insectos, lombrices, carroña e ingiere excremento de otros congéneres y animales para enriquecer su flora bacteriana (Rueda et al, 2007).</i></p> <p><i>Se usa principalmente como mascota, al considerarla de buena suerte, lujo y prosperidad para las familias. En la mayoría de los casos se mantienen los animales en encierros de numerosos individuos (Castaño-Mora y Medem 2002), además, tener un mayor número de individuos parece ser directamente proporcional a la suerte que se cree va a tener la familia que las conserva como mascotas. Adicionalmente, en algunos sitios del Caribe se cree en que su consumo aumenta el vigor sexual. También se le usa como alimento en el norte del Chocó, algunas regiones del Caribe y en los Llanos Orientales, además de comercializarla para el mismo fin (Morales et al, 2015).</i></p> <p><i>Según la Resolución MADS 1912 del 2017, esta especie se encuentra en categoría de vulnerable (VU), según el libro rojo de reptiles la amenaza más grave en las poblaciones trasandinas de la especie es la extracción generalizada de individuos de las poblaciones naturales. En los Llanos Orientales los consumen y trafican localmente hacia Venezuela, pero en esta zona el peligro para la especie estaría más relacionado con la destrucción de su hábitat que con su uso directo. Las actividades que conllevan a la deforestación y pérdida de hábitat (ganadería, quemas, minería ilegal y extracción de madera) constituyen una amenaza para las poblaciones de la especie, dado que su baja movilidad las hace muy susceptibles a la muerte o captura cuando se destruyen sus hábitats.</i></p> <p><i>Es importante aclarar que Geochelone carbonaria fue reclasificada taxonómicamente como Chelonoidis carbonaria.</i></p>

La importancia de afectación de dichas especies se sustenta en la siguiente matriz:



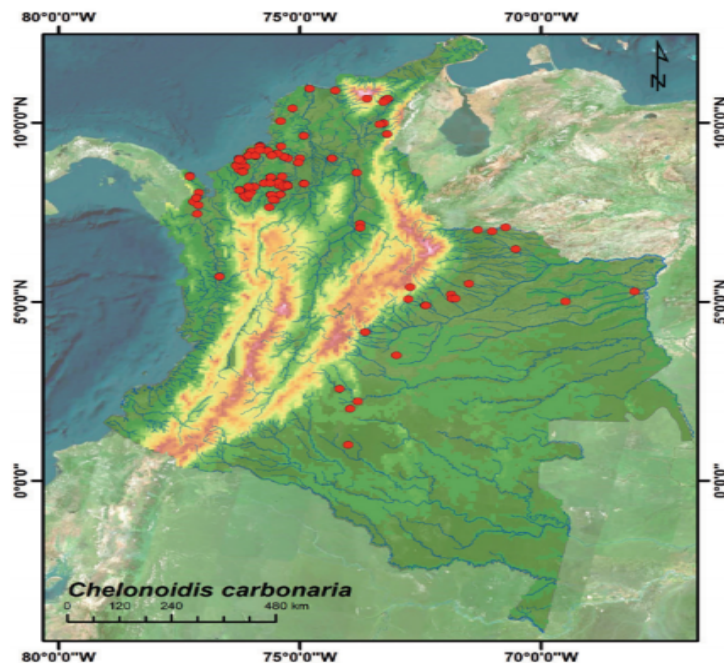
Análisis

Intensidad (IN): "... Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección..."

No se tiene una cifra real ni actualizada o datos estadísticos disponibles en donde se pueda determinar la intensidad con la cual, la fauna es afectada, en especial las especie de Tortuga Morrocoy, sin embargo según el Ministerio de Medio Ambiente, el nivel de tráfico de especies se obtiene en relación con el número de incautaciones que se dan por parte de las autoridades, así las cosas ,entre 2010 y 2015, en lo que tiene que ver con reptiles, la especie más traficada fue la tortuga morrocoy (*Geochelone carbonaria*), con 1847 incautaciones.

Extensión (EX): "... Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno ..." Esta especie de tortuga morrocoy, en Colombia se encuentra distribuida geográficamente en gran parte del territorio nacional, identificándola principalmente en los siguientes departamentos: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, Santander, Sucre, Tolima y Vichada. También existe silvestre en la isla de Providencia, donde se supone fue introducida (Castaño-Mora y Lugo Rúgeles 1981).

En la subregión biogeográfica, se encuentra en las tierras bajas chocoanas del Pacífico, tierras bajas húmedas del Caribe y cuenca del río Magdalena. De igual forma, en las tierras bajas secas del Caribe, Sierra Nevada de Santa Marta, los llanos, Provincia Imerí de la Amazonia. Su distribución altitudinal: llega hasta los 300 msnm.



Fuente: Libro rojo de reptiles en Colombia, 2015.



Dado que el municipio de Montería, en el departamento de Córdoba, fue el sitio de origen de las tortugas, sobre esta región es donde se realiza el impacto negativo y la presión directa sobre la población de esta especie en su medio natural.

Persistencia (PE): “... Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción ...”

La tortuga morrocoy se reproduce durante los meses de agosto-enero, aun cuando anida con mayor frecuencia en septiembre-noviembre. El tamaño promedio de la nidada es de 6 huevos (1-15), un tanto esféricos (45 x 40 mm) y de cáscara quebradiza, los cuales son puestos dentro de un nido poco profundo excavado por la propia hembra y tardan alrededor de 5 meses en eclosionar. Múltiples nidadas (3 a 5) son puestas, en una estación reproductiva, por la misma hembra a intervalos de 30 o 40 días (Rueda et al, 2007).

Reversibilidad (RV): “...Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente ...”

En cuanto a este criterio y teniendo en cuenta tanto las características reproductivas mencionadas con anterioridad como su amplia distribución en el país, se considera que la alteración de la especie puede ser asimilada por el entorno de forma medible en un periodo menor a un año.

5. CONCLUSIONES DEL INFORME TÉCNICO

*Una vez analizados los hechos y las circunstancias de la infracción ambiental, con las cuales se motiva y se procede con el presente proceso sancionatorio, y conforme lo Página 11 de 11 establece la normatividad ambiental vigente, en cumplimiento del artículo 9 del Decreto 3678 de 2010 (Compilado en el artículo 2.2.10.1.2.6 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015) y el Artículo 48 de la Ley 1333 de 2009, se sugiere imponer la sanción de RESTITUCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES al señor SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.070.951.668 de Facatativá, correspondiente a dos (2) especímenes de Fauna Silvestre denominada TORTUGA MORROCOY (*Geochelone carbonaria*) acorde a lo expuesto anteriormente.*

De igual forma, en lo que cabe dentro del presente proceso sancionatorio y desde lo jurídico, continuar con las acciones pertinentes a que haya lugar, para la imposición de la sanción concluida en el presente Informe Técnico de Criterios. (...)

VII. COMPETENCIA DE LA SECRETARIA



Que en relación con la competencia de esta Entidad, es preciso señalar que mediante el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 546 de 2013, se modificó la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades del Distrito, dentro de las cuales se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente, a la cual se le asignó, entre otras funciones, la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales se otorgan o niegan las licencias ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental de competencia de este ente administrativo, así como los actos administrativos que sean necesarios para adelantar el procedimiento que tenga como fin el licenciamiento ambiental y demás autorizaciones ambientales.

Que en virtud del Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado parcialmente por el Decreto 175 del 04 de mayo de 2009, se estableció la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, asignando las funciones de sus dependencias dentro de las cuales, está la de suscribir los actos administrativos por medio de los cuales la Secretaría otorga, concede, niega, modifica los permisos y/o autorizaciones ambientales.

Que en virtud del artículo 1° numeral 2 de la Resolución 01466 del 24 de mayo del 2018, modificada por la resolución 02566 del 15 de agosto de 2018 en la cual el Secretario Distrital de Ambiente delegó en cabeza de la Dirección de Control Ambiental de la entidad, *Expedir los actos administrativos que decidan de fondo los procesos sancionatorios.*

Que, en mérito de lo expuesto, La Dirección de Control Ambiental;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR Responsable al Señor **SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.951.668, a quien se le incautó dos (2) especímenes de Fauna Silvestre denominados **TORTUGA MORROCOY (*Geochelone carbonaria*)**, del cargo formulado en el Auto No. 02945 del 05 de noviembre de 2013, por infringir el artículo 196 (Modificado por el art. 27, Decreto Nacional 309 de 2000) decreto 1608 de 1978, Resolución 438 de 2001, hoy derogada por la Resolución 1909 del 2017 en sus artículos artículo 2 y 4 parágrafo 7, modificada por la Resolución 0081 del 2018, por no portar el respectivo salvoconducto que respalde la movilización del espécimen, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior imponer al Señor **SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.951.668, **SANCION** consistente en **RESTITUCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES DE FAUNA**, de dos (2) especímenes de Fauna Silvestre denominados **TORTUGA MORROCOY (*Geochelone carbonaria*)**.

PARÁGRAFO. - Al momento de la notificación, se hará entrega de la copia simple del **Informe Técnico de criterios No. 00481, 15 de abril del 2019**, el cual motiva la imposición de la sanción de Restitución, el cual hace parte integral del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. – Ordenar a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, emitir concepto técnico con el fin de determinar existencia, ubicación de los especímenes incautados dos (2) especímenes de Fauna Silvestre denominados **TORTUGA MORROCOY (*Geochelone carbonaria*)**.

Parágrafo. - Lo que antecede con el fin de realizar la disposición final de los especímenes incautados, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO. - Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al Señor **SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.951.668, en la Carrera 91 No. 40 A-27 de esta ciudad, de conformidad con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo decreto 01 de 1984.

PARÁGRAFO. – El señor **SANDRO EMANUEL HERRERA GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.951.668, deberá presentar al momento de la notificación, documento idóneo que lo acredite como tal.

ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar al Procurador Delegado para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios el presente acto administrativo, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad con lo señalado en el memorando 005 del 14 de marzo de 2013 emitido por el mismo Ente de Control enunciado y su instructivo.

ARTÍCULO SEXTO. - Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal que para el efecto disponga la Entidad. Lo anterior en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.



ARTÍCULO SÉPTIMO. - Reportar la presente sanción una vez se encuentre ejecutoriada, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encargado del **RUIA**, de conformidad con lo establecido en los artículos 57, 58 y 59 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO. - Contra la presente resolución procede recurso de reposición el cual deberá interponer ante la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaría, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de mayo del año 2019

CARMEN LUCIA SANCHEZ AVELLANEDA
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Elaboró:

LADY JOHANNA TORO RUBIO	C.C:	1010167849	T.P:	N/A	CPS:	CONTRATO 2019-0250 DE 2019	FECHA EJECUCION:	29/04/2019
LADY JOHANNA TORO RUBIO	C.C:	1010167849	T.P:	N/A	CPS:	CONTRATO 2019-0250 DE 2019	FECHA EJECUCION:	01/05/2019

Revisó:

BIBIANA ANDREA OLAYA IGUA	C.C:	23690977	T.P:	N/A	CPS:	CONTRATO 2019-0302 DE 2019	FECHA EJECUCION:	22/05/2019
---------------------------	------	----------	------	-----	------	----------------------------------	---------------------	------------

Aprobó:

Firmó:

CARMEN LUCIA SANCHEZ AVELLANEDA	C.C:	35503317	T.P:	N/A	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	30/05/2019
------------------------------------	------	----------	------	-----	------	-------------	---------------------	------------